

ANÁLISIS DEL SECTOR QUE SUSTENTA UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Acorde con lo establecido en el Artículo 2.2. 1. 1. 1. 6. 1., del Decreto 1082 de 2015:

"A Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al Objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal de dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso."

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Viceveeduría Distrital proceso de gestión documental.

NOMBRE DEL PROYECTO: NO APLICA DESCRIPCIÓN DE NECESIDAD:

La Veeduría Distrital es un organismo de vigilancia y control de la administración distrital de carácter asesor y preventivo, que goza de autonomía administrativa y presupuestal, la cual tiene por objeto velar por la moralidad y la eficacia administrativa.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el artículo 119 del Decreto Ley 1421 de 1993, determinó sus funciones, así:

"1. Examinar e investigar las quejas y reclamos que le presente cualquier ciudadano, o las situaciones que por cualquier otro medio lleguen y su conocimiento, con el fin de establecer si la conducta de los funcionarios y trabajadores oficiales es contraria a la probidad, discriminatoria o abiertamente violatoria del ordenamiento jurídico vigente. 2. Intervenir en asuntos que tengan que ver con la moral pública ante tribunales y juzgados en defensa de los intereses distritales; denunciar los hechos que considere delictuosos y que encuentre en las investigaciones adelantadas o en los documentos llegados a su poder; verificar que las entidades se constituyan en parte civil e inicien las demás acciones pertinentes, cuando a ello hubiere lugar, y colaborar para que los procesos penales por delitos contra la administración, imputados a funcionarios o ex funcionarios, se adelanten regularmente. 3. Solicitar a la autoridad competente la adopción de las medidas que considere necesarias con el fin de impedir la utilización indebida de los bienes y recursos distritales".

En el marco de la normatividad relacionada, el Concejo de Bogotá D.C., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, mediante el Acuerdo No. 24 del 2 de diciembre de 1993, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital No. 207 de 2006, estableció la estructura orgánica de la Veeduría Distrital, determinó las



funciones por cada dependencia y estableció su planta de personal, así como el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos y la escala de remuneración.

A través del Acuerdo Distrital No. 207 de 2006, se modificó la estructura orgánica de la entidad, determinando la siguiente estructura:

1. Despacho del Veedor Distrital
 - 1.1. Oficina Asesora de Jurídica
 - 1.2. Oficina Asesora de Planeación
2. Despacho del Viceveedor
3. Veedurías Delegadas
 - 3.1. Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal
 - 3.2. Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales
 - 3.3. Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos
 - 3.4. Veeduría Delegada para la Contratación

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el artículo 5° del Acuerdo 24 de 1993, a la Viceveeduría Distrital le corresponde:

- a. Desempeñar las funciones del despacho del veedor en los casos de falla absoluta o temporal de su titular;
- b. Coordinar, bajo la dirección del Veedor, el cumplimiento de las normas legales y orgánicas de la Veeduría y el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la entidad;
- c. Asesorar al Veedor en la formulación y adopción de las estrategias, planes y programas que deba adelantar la Veeduría, velar porque estos se cumplan adecuadamente;
- d. Preparar, bajo la dirección del Veedor los informes que deba presentar la Veeduría;
- e. Refrendar con su firma los actos del Veedor, cuando fuere el caso;
- f. Llevar la representación del Veedor en los actos o asuntos que éste determine;
- g. Revisar los proyectos de actos administrativos y demás documentos que deban someterse a la aprobación del Veedor;
- h. **Planear, coordinar, controlar y evaluar a través de sus dependencias, la organización administrativa, financiera, de recursos humanos y físicos y la correcta prestación de los servicios administrativos de la Veeduría;**
- i. Servir de medio de comunicación y de coordinación entre el Veedor y los funcionarios de las distintas dependencias;
- j. Presentar los informes que le sean solicitados en desarrollo de sus funciones; y
- k. Las que le delegue el Veedor, y las que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

En desarrollo de las responsabilidades asignadas a la Viceveeduría y con el fin de garantizar una gestión documental jurídicamente sólida, se hace indispensable contar con apoyo de carácter jurídico que permita fortalecer la correcta

interpretación y aplicación del marco normativo archivístico, así como la adecuada administración de la información pública que circula en la entidad. La complejidad de la dinámica institucional exige asegurar que los procedimientos, lineamientos, instrumentos y decisiones relacionadas con el ciclo de vida de los documentos se encuentren plenamente armonizados con las disposiciones vigentes en materia de transparencia, acceso a la información pública, conservación documental y protección de datos personales, con el propósito de prevenir riesgos jurídicos y garantizar actuaciones administrativas ajustadas al principio de legalidad.

En los últimos períodos se han identificado nuevos retos asociados a la actualización y adopción de los instrumentos archivísticos institucionales, la revisión y estandarización de los procedimientos internos de gestión documental y la necesidad de incorporar criterios jurídicos para el tratamiento de información sensible. En particular, aquella relacionada con derechos humanos, memoria histórica y documentos sometidos a reserva legal, cuyo manejo exige un análisis normativo riguroso que garantice el equilibrio entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Estas actividades demandan un acompañamiento jurídico permanente que permita sustentar técnica y legalmente las decisiones institucionales, emitir conceptos y observaciones jurídicas sobre actos administrativos, contratos y procedimientos asociados a la producción, uso, transferencia, acceso o eliminación de documentos de archivo, así como apoyar la formalización de decisiones adoptadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en materia archivística y de administración de la información.

En este contexto, se evidencia la necesidad de vincular un profesional en derecho que aporte una lectura jurídica integral a los procesos de revisión normativa, actualización de instrumentos archivísticos, análisis de actos administrativos y apoyo a los procesos contractuales asociados a la gestión documental. Su intervención resulta determinante para asegurar que las disposiciones del Archivo General de la Nación, las políticas distritales y la normativa vigente en materia de transparencia y acceso a la información se incorporen de manera coherente en los documentos institucionales, los lineamientos internos y las decisiones administrativas.

Asimismo, el apoyo jurídico es esencial para fortalecer las actividades de socialización institucional dirigidas a los servidores públicos, orientadas a la correcta comprensión de las responsabilidades legales derivadas de la gestión documental y del manejo de la información pública. Este acompañamiento permitirá, además, evaluar los riesgos jurídicos asociados a la gestión documental, revisar la pertinencia legal de los instrumentos técnicos y garantizar que los lineamientos institucionales sobre tratamiento, acceso y uso de la información, especialmente aquella vinculada a derechos humanos y memoria histórica, se mantengan debidamente actualizados.

De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece que:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”.

En este sentido, el artículo 2.8.4.4.5 “Condiciones para contratar la prestación de servicios” del Decreto 1068 de 2015 establece que los contratos de prestación de servicios, ya sea con personas naturales o jurídicas, solo podrán celebrarse cuando no exista personal de planta con la capacidad para ejecutar las actividades requeridas. En atención a esta disposición, la inexistencia o insuficiencia de personal fue verificada previamente por el profesional responsable de Talento Humano, quien dejó constancia de dicha situación en el documento que hace parte integral del presente estudio previo.

De igual manera, conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, “en ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. Este término corresponde al periodo definido en el presente estudio previo y en el objeto contractual, durante el cual se espera que el contratista ejecute de manera completa y satisfactoria las actividades, productos y obligaciones previstas, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que llegaren a ser necesarias para garantizar su cumplimiento.

Finalmente, se precisa que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, en cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de planeación contractual.

VERIFICACIÓN EN EL PLAN DE ADQUISICIONES:

F26-13-007 Prestar servicios profesionales a la Viceveeduría Distrital para apoyar la actualización e implementación del componente jurídico de los instrumentos archivísticos, permitiendo el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada gestión documental en consonancia con los objetivos institucionales

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

F26-13-007 Prestar servicios profesionales a la Viceveeduría Distrital para apoyar la actualización e implementación del componente jurídico de los instrumentos archivísticos, permitiendo el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada gestión documental en consonancia con los objetivos institucionales

2. ANÁLISIS ECONÓMICO Y TÉCNICO.

La Viceveeduría Distrital requiere para satisfacer la necesidad señalada en este

documento, contratar los servicios indicados en el objeto del contrato, que puede ser desarrollado por personas naturales con título profesional en derecho, Tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y título de posgrado en áreas relacionadas con la actividad contractual.

Así las cosas, el valor aprobado en el Plan de Adquisiciones de la Entidad y con fundamento en los principios de eficiencia, eficacia y economía, se requiere la contratación de servicios profesionales, con personas natural, por un valor total de **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$85.284.420)**, incluidos impuestos y demás tasas, gastos y deducciones a que haya lugar, con el fin de apoyar en las actividades que comprenden el desarrollo del objeto contractual.

2.1. ESTUDIO DE LA OFERTA

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, la contratación directa se realiza en atención a la idoneidad y/o experiencia del oferente, para ejecutar el objeto contractual, bien sea por una persona natural o jurídica, según corresponda, lo cual es verificado en forma directa por la entidad, con base en el perfil requerido y los documentos aportados por el futuro contratista.

2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR

Con fundamento en el artículo 2.2.1.1.1.6.1, del Decreto 1082 de 2015 y en aplicación de la Guía para la elaboración de estudios del sector de Colombia Compra Eficiente en relación con la contratación directa de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se establece el siguiente análisis.

Como quiera que el sector de contratación de prestación de servicios personales está integrado por el conjunto de personas naturales y/o jurídicas que prestan sus servicios en entidades públicas o privadas; esta contratación no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las propias del ejercicio de la actividad requerida, por lo tanto, la determinación del perfil está relacionado con el conocimiento y acreditación de estudios y/o experiencia establecidos en este documento.

Teniendo en cuenta que la contratación que se realiza es una contratación directa con persona natural a quien se le verificarán las condiciones de experiencia e idoneidad, sin que para el caso se hayan obtenido previamente varias ofertas.

Los honorarios a pagar por la Veeduría Distrital, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el presente documento y acorde con la tabla de honorarios para el pago de contratos de prestación de servicios profesionales a la gestión vigente.

La remuneración establecida por la entidad, para el pago de honorarios por la prestación de los servicios objeto del contrato es por un valor mensual fijo, considerando que esta forma de pago permite verificar durante un término prudencial el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

2.3. REQUISITOS PARTICULARES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.

Considerando las actividades objeto del contrato, las obligaciones específicas y/o productos esperados, y en concordancia con las normas aplicables vigentes, los controles para la gestión de riesgos y el mayor nivel de riesgo identificado, el futuro contratista debe acreditar las condiciones psicofísicas y certificaciones de conocimiento o competencia propias para el ejercicio de las actividades, labor o profesión, según corresponda.

Para el presente caso y de acuerdo con la necesidad de la entidad, se consideran pertinentes:

a) Certificado de capacitaciones o entrenamientos específicos:

N.A.

2.4. ANÁLISIS PERSPECTIVA LEGAL Y COMERCIAL

Desde el punto de vista legal la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, está establecida legalmente, como una de las causales de contratación directa, acorde con el literal h) del numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, así mismo, en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, que dispone lo siguiente:

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.”

De conformidad con lo anterior, las entidades estatales podrán suscribir contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de acuerdo con la determinación del perfil del profesional requerido para satisfacer la necesidad y al

cumplimiento de condiciones académicas, profesionales y/o de experiencia desarrollada en virtud de la ejecución de contratos anteriores, con el fin de cumplir las metas propuestas para cada vigencia en torno a la gestión contractual.

2.5. ANÁLISIS PERSPECTIVA ECONÓMICA

El análisis de la perspectiva económica para la presente contratación parte del comportamiento actual del sector de servicios profesionales en Colombia, particularmente en áreas jurídicas especializadas en gestión documental, transparencia y administración de la información pública. En el mercado se evidencia una oferta consolidada tanto de personas naturales como jurídicas, lo que permite identificar rangos de precios estables y condiciones homogéneas en la prestación de estos servicios. No obstante, también se observa que el acceso a perfiles con formación posgradual y experiencia específica en normativa archivística y gestión de información con enfoque jurídico presenta variaciones en los costos, dado el nivel de especialidad que requiere la función.

De acuerdo con la estructura organizacional de la entidad y con la verificación realizada por Talento Humano sobre la insuficiencia de personal de planta para asumir estas responsabilidades, se confirma la necesidad de acudir a la modalidad de contratación por prestación de servicios. En este segmento del mercado, los profesionales suelen ofrecer servicios de asesoría jurídica especializada de manera independiente, lo que permite a las entidades acceder a conocimiento técnico altamente calificado sin necesidad de estructuras administrativas complejas. El valor de estos servicios depende principalmente del nivel de especialización y de la responsabilidad derivada del acompañamiento jurídico en la interpretación normativa, revisión de instrumentos archivísticos, análisis de actos administrativos y apoyo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

En la revisión de precios del mercado se identifican dos modalidades de oferta:

Personas jurídicas, que prestan servicios mediante esquemas de subcontratación y portafolios amplios, cuyos costos suelen ser más elevados debido a cargas administrativas internas.

Profesionales independientes, quienes ofrecen servicios especializados de asesoría jurídica en gestión documental, a partir de su formación y experiencia. Esta modalidad resulta más eficiente para la entidad en términos económicos, ya que permite contratar directamente al profesional responsable de las actividades sin intermediación de terceros.

El análisis de costos realizado indica que el valor mensual estimado para la contratación se encuentra dentro de los rangos habituales del sector público para profesionales del Derecho con especialización y experiencia en gestión documental. Se verificó también que el valor proyectado incluye las cargas tributarias correspondientes, conforme a la normatividad vigente y a la tabla de honorarios definida por la Veeduría Distrital.

Adicionalmente, la perspectiva económica considera los requisitos legales exigidos a los potenciales contratistas, tales como la ausencia de inhabilidades o sanciones registradas en los certificados de antecedentes, así como la obligación de cumplir con la normativa tributaria aplicable, incluyendo el pago del IVA cuando haya lugar a ello. Estas condiciones son consistentes con la regulación estatal y no generan cargas extraordinarias que afecten el costo del servicio.

2.6. ANÁLISIS PERSPECTIVA TÉCNICA

Desde la perspectiva técnica, la presente contratación se sustenta en la necesidad de contar con un profesional con formación jurídica y experiencia en gestión documental, que garantice la adecuada interpretación, aplicación y articulación de la normativa archivística, de transparencia y de acceso a la información dentro de los procesos institucionales. Así mismo, se requiere su apoyo en actividades relacionadas con la valoración primaria de los documentos, entre otras funciones esenciales para el cumplimiento de las obligaciones del Proceso de Gestión Documental.

La naturaleza de las actividades proyectadas para la vigencia exige un nivel de experticia que integra conocimientos jurídicos, archivísticos y normativos, lo cual supera la capacidad operativa del personal de planta actualmente disponible, según la verificación realizada por Talento Humano.

El conjunto de actividades técnicas que deberá desarrollar el contratista incluye el análisis jurídico de los instrumentos archivísticos, la revisión de procedimientos internos, la emisión de conceptos especializados, la verificación de cumplimiento normativo y el acompañamiento técnico a las áreas responsables de la gestión documental. Estas tareas requieren conocimiento actualizado del marco regulatorio, criterios de valoración primaria documental, lineamientos de administración de información pública y principios de transparencia, así como experiencia en la interpretación y aplicación de la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014, Decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación.

Adicionalmente, la implementación y actualización de los instrumentos archivísticos institucionales —como la TRD, CCD, PGD, SIC y PINAR— requiere una articulación permanente entre la perspectiva técnica archivística y el enfoque jurídico, para asegurar que estos documentos no solo cumplan con la normatividad vigente, sino que también respondan a las funciones misionales de la entidad.

Este proceso implica análisis detallados que solo puede desarrollar un profesional especializado, dado el impacto que estas decisiones tienen en la administración de la información, la memoria institucional y la responsabilidad administrativa.

El soporte técnico a los comités institucionales, las actividades de capacitación a los servidores públicos y la elaboración de documentos técnicos y jurídicos constituyen también componentes esenciales del servicio. Estas funciones requieren precisión

conceptual, capacidad analítica y dominio del entorno normativo, características que justifican la contratación de un profesional especializado y no de un perfil operativo o técnico general.

2.6.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El mercado colombiano ofrece una amplia gama de alternativas disponibles para atender las necesidades de servicios que demandan los sectores público y privado. Tales servicios, por su naturaleza, y de conformidad con clasificación asignada, se agrupan en los segmentos 70 a 94 del Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), V.14.080.

De acuerdo con la clasificación del UNSPSC, los servicios profesionales relacionados con el quehacer archivístico y la gestión documental requeridos por la Veeduría Distrital se agrupan bajo la siguiente categoría:

Grupo	F	Servicios
Segmento	80	SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Familia	11	Servicios de Recursos Humanos
Clase	16	Servicios de personal temporal
Código	80111600	

Fuente: Naciones Unidas (UNSPSC)

3. ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

Los riesgos de tipo administrativo y aquellos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato a celebrar, se estiman, tipifican y asignan de acuerdo con el cuadro anexo. (Remitirse a Matriz de Riesgos).

Para tal efecto los riesgos son:

1. Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato
2. Presentación de informes, presentaciones o documentos incompletos o con errores.
3. Posibilidad de ocurrencia de daños a los bienes, equipos o instalaciones de la Entidad contratante por parte del contratista.
4. Posible inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.

La administración de estos riesgos se realizará conforme a los controles definidos

específicamente para cada riesgo en la Matriz de Riesgos, los cuales pueden ser de ejecución diaria, mensual o bajo demanda, según su naturaleza. Estos controles estarán a cargo del supervisor del contrato, quien verificará su cumplimiento y aplicará las acciones correspondientes. La periodicidad y forma de pago se efectuarán conforme a lo establecido en el contrato y contra aceptación de los bienes y/o servicios por parte del supervisor designado por la entidad.

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La demanda institucional que justifica la presente contratación surge de la necesidad de contar con un profesional que brinde apoyo jurídico y técnico especializado en materia de gestión documental, en correspondencia con las obligaciones definidas para el desarrollo del contrato. La entidad requiere fortalecer la revisión, interpretación y aplicación de la normativa archivística, así como asegurar que los documentos, procedimientos y soportes generados en el Proceso de Gestión Documental cumplan con los requisitos legales, técnicos y administrativos exigidos por la Ley General de Archivos y sus disposiciones reglamentarias.

El servicio requerido comprende actividades como la revisión jurídica de instrumentos y documentos archivísticos, la elaboración de soportes técnicos, la verificación de la coherencia normativa de los procedimientos institucionales, el acompañamiento especializado en procesos de valoración primaria y la articulación de los lineamientos emitidos por las autoridades del sector archivo y de transparencia. Estas tareas requieren conocimientos específicos que combinan la formación jurídica con la experiencia en gestión documental, así como la capacidad de identificar ajustes normativos, sustentar decisiones técnicas y orientar el cumplimiento de los estándares aplicables en la administración pública.

La naturaleza de estas actividades evidencia que su prestación demanda un nivel de especialización que no se encuentra disponible en la planta de personal de la entidad, situación previamente verificada por el proceso de Administración del Talento Humano. En el mercado, este tipo de servicios es atendido de manera habitual por profesionales independientes con experiencia jurídica aplicada a la gestión documental, dado que no requieren estructuras empresariales complejas, sino competencias técnicas individuales que permitan desarrollar análisis, conceptos y revisiones con oportunidad, rigor y precisión. En consecuencia, la contratación de un profesional especializado se ajusta tanto a las necesidades institucionales como a las prácticas del sector público para cubrir funciones misionales que exigen conocimientos avanzados y criterios técnicos especializados.

La demanda de estos servicios especializados se refleja también en la experiencia reciente de la propia Veeduría Distrital, la cual ha requerido, en diferentes vigencias, la contratación de profesionales jurídicos y técnicos para apoyar procesos misionales asociados a la gestión documental y al cumplimiento de las obligaciones normativas en

la materia. Los contratos suscritos en años anteriores evidencian que la entidad ha acudido de manera recurrente a este tipo de apoyo profesional para atender las necesidades derivadas de la interpretación normativa, la revisión de instrumentos archivísticos y la elaboración de soportes técnicos, lo que confirma la naturaleza permanente y especializada de la demanda institucional. El cuadro que se presenta a continuación sintetiza algunos de estos antecedentes contractuales, permitiendo observar la continuidad y pertinencia de este tipo de servicios dentro de las funciones de la Viceveeduría Distrital.

Tabla No. 2 Cuadro indicativo Contrataciones Directas (año 2024-2025)

No. Contrato	Modalidad de selección	Entidad contratante	Objeto	Valor mensual honorarios
128 de 2025	Contratación Directa	Veeduría Distrital	Prestar los servicios profesionales especializados en la Viceveeduría Distrital para apoyar la tercera fase del proceso de actualización de la TRD desde el componente jurídico de cada uno de los soportes del instrumento de archivo hasta su presentación ante el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, D.C.	\$6.890.000
193 DE 2024	Contratación Directa	Veeduría Distrital	Prestar los servicios profesionales especializados para llevar a cabo la valoración primaria de los documentos y brindar apoyo en la elaboración, actualización e implementación de instrumentos archivísticos en el marco del proceso de gestión documental de la Viceveeduría Distrital	\$6.500.000

No. Contrato	Modalidad de selección	Entidad contratante	Objeto	Valor mensual honorarios
314 DE 2024	Contratación Directa	Veeduría Distrital	Prestar los servicios profesionales especializados en la Viceveeduría Distrital para apoyar la segunda fase del proceso de actualización de la TRD desde el componente jurídico de cada uno de los soportes del instrumento de archivo hasta su presentación ante el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, D.C.	\$6.500.000

Fuente: Basado en información del Portal de contratación SECOP II.

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Como se observa, la prestación de servicios jurídicos con enfoque especializado en gestión documental ha sido una necesidad recurrente tanto en la Veeduría Distrital como en otras entidades del orden distrital y nacional, en atención a las exigencias normativas relacionadas con la administración, acceso, valoración y disposición de los documentos públicos. La ausencia de personal en la planta con la formación y experiencia necesarias para asumir las responsabilidades jurídicas derivadas de la interpretación y aplicación de la Ley 594 de 2000, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación ha llevado a que estas entidades acudan a la contratación de profesionales externos para garantizar la adecuada observancia del marco legal.

El análisis del mercado confirma que la oferta de este tipo de servicios se configura principalmente a través de profesionales independientes, cuyo ejercicio especializado permite atender necesidades jurídicas particulares como la revisión normativa aplicable a los instrumentos archivísticos, la emisión de conceptos sobre actuaciones administrativas relacionadas con documentos de archivo, el acompañamiento en procesos de acceso a la información pública, así como la definición de lineamientos institucionales para el manejo, tratamiento y valoración de documentos, incluida la información asociada a derechos humanos y memoria histórica. Esta especialización exige contar con abogados titulados con experiencia acreditada en gestión documental y en el sector público, dado que las actividades requieren un conocimiento profundo de la normativa archivística y de transparencia, así como la capacidad para orientar jurídicamente decisiones institucionales que afectan la administración de la información

pública.

En este contexto, se presenta a continuación un cuadro comparativo que recoge antecedentes de contrataciones de servicios con características similares en el nivel distrital, el cual evidencia cómo la demanda por profesionales jurídicos con competencias en gestión documental constituye una práctica extendida y necesaria para el cumplimiento adecuado de las funciones misionales de las entidades públicas.

Tabla No. 3 Cuadro indicativo Contrataciones Directas (años 2024 - 2025)

No. Contrato	Modalidad de selección	Entidad contratante	Objeto	Valor mensual honorarios
UMV-CPS-058-2024	Contratación directa	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Prestar servicios profesionales como abogada para realizar actividades jurídicas enfocadas a la valoración primaria de los documentos, estructuración contractual y seguimiento de procesos de selección	\$6.675.757
2025	Contratación directa	Contraloría de Bogotá	Prestar servicios profesionales especializados, para apoyar el proceso de Gestión Documental en la valoración primaria de la actualización de las tablas de retención documental, en el marco del Proyecto de Inversión 8021 meta 3	\$6.036.363

Fuente: Basado en información del Portal de contratación SECOP II.



Como se observa, este tipo de servicios ha sido contratado en diversas oportunidades por entidades del orden distrital mediante la vinculación de personas naturales, especialmente en aquellos casos en los que la planta de personal no cuenta con profesionales suficientes o cuyo perfil no reúne la idoneidad técnica y jurídica necesaria para atender de manera directa las necesidades específicas del proceso. Esta práctica responde a la especialización que exige la normativa archivística y de transparencia, así como a la necesidad de contar con profesionales que puedan asumir, con rigor jurídico, las responsabilidades derivadas de la gestión y administración de la información pública.

Bogotá, D.C. 02 de enero de 2026